

tes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*M. Auza.—Juan J. de la Garza.—José S. Arteaga.—Ignacio Ramírez.—M. de Castañeda y Nájera.—S. Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis M. Aguilar, secretario.*

Es copia que certifico. México, Octubre 12 de 1874.—*Lic. Enrique Landa, oficial mayor.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Chihuahua por el C. Reyes Gonzalez, contra la órden del Gefe político de esa Capital, que le prohíbe fundir metales y granjas en un horno que tiene establecido en la misma vecindad.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de de Distrito.

El Promotor fiscal de la Federacion dice: que el C. Reyes Gonzalez ha ocurrido solicitando, que la Justicia Federal lo ampare y proteja por creer violadas en su persona las garantías que otorgan los artículos 4º y 7º de la Constitucion general. Hace consistir este ataque, en la órden que recibió del C. Gefe político de este Distrito, por la cual se le prohíbe seguir fundiendo metales en una hacienda ó horno que tiene establecido en su casa habitacion, muy inmediata al centro y plaza principal de la poblacion. Pedido informe á la autoridad ejecutora del acto reclamado, esta lo ha rendido satisfactorio, y de este informe resulta, que la prohibicion que se hizo al quejoso no es absoluta, puesto que no se le ha dicho que no funda metales, ni en aquel lugar ni en otro alguno, sino unicamente, que suspenda sus trabajos de fundicion en aquel horno ó

hacienda de beneficio, por el daño grave que causaba á la poblacion con el humo malsano que expiden al fundirse dichos metales: así consta por el informe vertido por la Junta de sanidad de esta Capital. Recibido este juicio á prueba por ocho dias, el quejoso ha presentado tres testigos, de cuyas declaraciones se deduce lo mismo que ha manifestado el C. Gefe político en su informe, esto es, que la prohibicion de no fundir no ha sido absoluta, sino con referencia unicamente al lugar ó punto en que se estaba verificando.

La garantía que invoca el quejoso consignada en el artículo 4º de la Constitucion, puede alguna vez suspenderse por sentencia judicial cuando ataque los derechos de tercero, ó por resolucion gubernativa cuando ofenda los de la sociedad. En este último caso puede colocarse ó suponerse la órden dictada por el C. Gefe político del Distrito, en virtud del perjuicio grave que recibia toda una sociedad, dimanando de allí las continuas quejas que recibia del vecindario para que se mandaran suspender aquellos trabajos. El quejoso puede muy bien establecer sus hornos en un lugar mas lejano de la poblacion en donde no ocasiona mal alguno á la salubridad pública, y si entonces la misma Gefatura política le prohibia este útil y honesto trabajo, y el aprovecharse de sus productos, indudablemente habrá lo que no hay ahora, violacion de la garantía que invoca el quejoso. Mucho menos la hay de la consignada en el artículo 27 de la misma Constitucion, porque ninguna propiedad se ha ocupado ni tratádose de ocupar del quejoso. Como la sentencia que se pronuncie debe ser tal, que solo se ocupe de la persona del quejoso, limitándose á protegerlo ó no en el caso especial sobre que versa el juicio, sin hacer ninguna declaracion general respecto de la ley ó acto que lo motive, inútil le parece al Promotor fiscal que suscribe ocuparse de lo que se dice de la Casa de moneda de esta Ciudad, y de otros casos análogos que cita el quejoso.

Por lo expuesto, y con fundamento de lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución federal, y en la ley de 20 de Enero de 1869, el Promotor que lleva la voz fiscal, pide: que ese juzgado se sirva declarar, que la Justicia de la Union no ampara ni protege al quejoso en el presente juicio, y que por no ser temerario ni malicioso el amparo solicitado, no ha lugar á que se le imponga la multa ó pena que establece la misma ley.

Chihuahua, Julio 1º de 1874.—

Es copia.—*Lic. J. de D. Búrgos.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Chihuahua, Julio 9 de 1874.—Vistos estos autos instruidos á solicitud del C. Reyes Gonzalez, y constando en ellos: que el día 21 de Mayo próximo pasado, presentó escrito quejándose, de que el C. Gefe político de ese Distrito, le prohibió fundir metales y grazas en el horno de fundicion que tiene establecido en su casa de habitacion, ubicada en la calle de la Escondida de esta ciudad, inmediata á otra hacienda tambien de fundicion que fué del finado General D. Angel Frias, y hoy pertenece al súbdito Español D. Domingo Leguinasába, expresando el quejoso, que con tal prohibicion considera violadas en su persona las garantías que le conceden los artículos 4º y 27 de la Constitución federal de 1857, concluyendo con pedir, que se le ampare y proteja contra la repetida prohibicion. La autoridad política informó, que Gonzalez construyó un horno de fundir metales en su casa de habitacion ubicada en esta ciudad, en una calle muy inmediata al centro: que luego que comenzó á fundir, los vecinos se quejaron al Gefe político, su antecesor, quien ordenó á Gonzalez, que no fundiese en su casa: que este obedeció suspendiendo sus trabajos; pero que algunos días despues los continuó y se repitieron las quejas de los vecinos, razon por qué, el informante repitió la orden. Dice además, que no considera

violadas las garantías que conceden los artículos 4º y 27 de nuestra carta fundamental, supuesto que la orden que motiva la solicitud de amparo, es una medida de policía fundada en las justas quejas de los vecinos de Gonzalez, y supuesto que este la consintió en el hecho de haberla acatado en la primera vez que se le intimó. El C. Promotor espuso: que la suspension que solicita el quejoso, está comprendida en la fraccion 1ª del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, y que debia concederse la suspension.

Decretada la suspension del acto reclamado, y pedido el informe con justificacion prevenido en el artículo 9º de la ley citada, el Gefe político se redujo á reproducir su anterior exposicion, remitiendo como justificante, una acta original de la sesion que tuvo el consejo de salubridad pública, bajo la presidencia del C. Gefe político el día 6 de Junio próximo pasado, en que consta, que el referido consejo opinó, que no debió consentirse la construccion del horno de que se trata, por ser su ubicacion contraria á las reglas de policía: que debe prohibirse la fundicion de metales en el centro de la poblacion, porque con ella se ataca la higiene y salubridad pública.

El C. Promotor fiscal pidió se recibiera este negocio á prueba, y habiéndose decretado de conformidad, el quejoso adujo la que convino á su derecho; esta fué testimonial y en ella declararon los CC. Manuel Escobar, Pedro Rodriguez Loya y Mariano Delgado, los que aseguran, que Gonzalez estableció en la casa de su propiedad una hacienda de beneficio de metales; que en esta ciudad hay otras en las mismas condiciones, en las que se han fundido y se funden metales; que el C. Gefe político ordenó verbalmente á Gonzalez, que suspendiera sus trabajos, y que la casa de moneda tiene su apartado en el centro de esta ciudad. En seguida los CC. Promotor y quejoso alegaron lo que consta en sus respectivos escritos, pidiendo el primero, que no se ampare á Gonzalez; y el

segundo, procurando convencer, de que en su persona se han violado las garantías que conceden los artículos 4º y 27 de la Carta fundamental de 1857, y de que en el presente caso lo favorecen también el 16, el 17 y las fracciones 1ª y 4ª del artículo 20 de la misma suprema ley.

Considerando: que de los escritos, alegatos y pruebas del quejoso, así como del informe del C. Gefe político, aparece, que la prohibición se contrajo á que Gonzalez fundiese en su casa, sin impedirle el ejercicio de su industria, de lo que, muy bien pudo ocuparse en cualquiera otro lugar: que el artículo 4º que invoca el actor, restringe la libertad de ejercer la profesion, industria ó trabajo que le acomode, cuando se ataquen los derechos de tercero, ó cuando se ofendan los de la sociedad.

Que efectivamente, la casa de moneda está ubicada en el centro de esta ciudad, y hay otras varias fundiciones en las mismas circunstancias que la de Gonzalez, las que, indudablemente producen los mismos inconvenientes para la poblacion.

Que en consecuencia, puede haber injusticia en que á unos se prohíba fundir en el lugar en que estan situados, mientras que á otros no se les hace reclamo alguno; pero que no por esto pueden considerarse violadas en las personas de aquellos, las garantías otorgadas en los artículos 4º y 27 que cita Gonzalez en su primer escrito, ni las que conceden los artículos 16, 19 y fracciones 1ª y 4ª del 20 á que se refiere en su último alegato.

Que en el caso presente, no son aplicables los artículos 4º, 16, 17, las fracciones 1ª y 4ª del 20 y el 27, por no habérsele privado de ejercer su industria, sino únicamente de fundir metales en la casa de su habitacion, ni molestado en su persona, familia, domicilio y papeles, ni haber habido quien ejerza violencia en su persona para reclamar sus derechos, ni ocupado su propiedad.

Con fundamento de los artículos citados,

del 101 de la repetida suprema ley y de la de 20 de Enero de 1869, se fallar:

1º: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Reyes Gonzalez, contra la Orden del C. Gefe político, contraria, á que no funda metales y granzas en el horno de fundicion establecido en la casa de su propiedad.

2º: No se le impone la multa prevenida en el artículo 16 de la referida ley de 20 de Enero de 1869, por la notoria pobreza del quejoso.

Hágase saber esta sentencia á los CC. Promotor fiscal é interesado; sáquese copia de ella, y remítase al Semanario Judicial para su publicacion, y elévense los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision. El C. Juez así lo dispuso, mandó y firmó por ante mí el secretario, de que doy fé.—*José Hierro*.—*Abraham Eriberto Perez*, secretario.

Es copia. Chihuahua, Julio 9 de 1874.
José Hierro.—*Abraham Eriberto Perez*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre 28 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Chihuahua por el C. Reyes Gonzalez, contra la Orden del Gefe político de la capital de Chihuahua, que le prohibió fundir metales y granzas en un horno que tiene establecido en la misma vecindad, cuya prohibición, segun manifiesta el quejoso, viola las garantías que consignan los artículos 4º y 27 de la Constitución federal. Visto el informe de la autoridad; el parecer fiscal, con cuanto mas se tuvo presente y ver convino.

Por sus mismos y legales fundamentos, se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 9 de Julio del presente año, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Reyes

Gonzalez, contra la Orden de Gefe político de Chihuahua contrada á que no funda metales y granzas en el horno de fundicion que tiene establecido en la misma ciudad.

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándolo testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Miguel Auza.*—*Juan José de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José S. Artaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, 12 de Octubre de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí por D. Benito Resusta, en representacion de los dueños de las Salinas del Peñon Blanco, contra el artículo 1º del decreto número 64 de la Legislatura del Estado, que aumenta la contribucion directa de uno por ciento, impuesta por la ley de Hacienda anterior, para las fincas rústicas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito del Estado.

El Promotor dice: que D. Benito Resusta como socio Administrador de las Salinas del Peñon Blanco, y en representacion de sus dueños, solicita amparo de la Justicia de la Union, contra el decreto número 64 de la actual H. Legislatura del Estado, que reforma el que la misma Cámara tiene expedido

bajo el número 28, por creer violadas con ellos directamente, las garantías individuales que otorga á los ciudadanos la fraccion 2ª del artículo 31 de la Constitucion de la República, y de un modo indirecto las que tambien conceden los artículos 4, 22 y 27 de la misma, conceptuando comprendido el caso en la fraccion 1ª del artículo 19 de la ley de 20 de Enero de 1869.

Pedido el informe respectivo al Gobierno del Estado, como la autoridad ejecutora de aquella disposicion; y ha faltado por lo mismo á uno de los deberes que le incumben. No obstante, como el participio ó intervencion que en el caso tiene, no es mas que el de llevar la voz informativa, á su perjuicio debe refluir aquella omision y desacato en que incurre.

Se trata pues, de que la H. Legislatura del Estado, al expedir la ley de 11 del que rige, no ha guardado por cierto la proporcion y equidad que debe haber al dictarse los impuestos para los gastos públicos del mismo Estado, y para demostrarlo se alude á las diversas comparaciones y reflexiones que surgen á primera vista de la desproporcionalidad que se amorita. En efecto, dividida como lo está la propiedad raiz en urbana y rústica, á cada uno le está señalada según su valor y calidad, la cantidad con que á proporcion debe contribuir para aquellos objetos; por manera, que todo lo que sea alterar esa misma proporcion, es excederse ó imponerle gravámen mayor del á que está obligado y sea compatible con la equidad que las leyes determinan.

Siendo esto así, las Salinas del Peñon Blanco están comprendidas, lo mismo que todas las de su clase en el Estado, en la segunda de aquella propiedad, esto es, en la rústica, porque ciertamente no son la simple finca ó habitación constituida la que forma la propiedad rústica, sino el terreno explotado ó inculto, como dice el quejoso, cuyos productos ó esquilmos no pueden ser iguales, y por eso es, que aun las mismas leyes los distinguen en naturales, industriales y